

El capitalismo informal y la reproducción de la marginalidad

Félix Reátegui Carrillo

Pontificia Universidad Católica del Perú

Instituto de Democracia y Derechos Humanos

Resumen

La pandemia de la COVID-19 podría no generar cambios trascendentales en el orden mundial, pero sí está poniendo de manifiesto la fragilidad del consenso sobre el libre mercado imperante en muchos países desde la década de 1990. El Perú puede ser un caso ilustrativo de esa realidad mundial. En el Perú, las reformas económicas de hace 30 años significaron un viraje hacia la economía de mercado y motivaron la emergencia del *capitalismo popular*, pero esto fue implantado sin un reforzamiento de instituciones económicas y políticas. Así, se generó la imagen de un país de clase media, pero la pandemia y las medidas de contención han revelado que esa era una realidad frágil y precaria. El reconocimiento de esa precariedad y de sus causas podría ser el efecto esperable de la pandemia y, en el mejor de los casos, ello podría llevar a una recuperación de la noción de bien común.

Palabras clave: pandemia, mercado peruano, libre mercado

Abstract

The COVID-19 pandemic could not generate transcendental changes in the world order, but it manifests the fragility of the consensus about the free market prevailing in many countries since de 90s. Peru can be an illustrative case of that world reality. In Peru, the economic reforms from 30 years ago meant a turn to the market economy and motivated the emergency of the popular capitalism, but this was implemented without a reinforcement of economic and political institutions. That way it generates the picture of a middle-class country, but the pandemic and the containment measures have revealed that this was a fragile and precarious reality. The recognition of this precariousness and its causes might be the expected effect of the pandemic, and, at best, it might lead to a recovery of the notion of the common benefit.

Key words: pandemic, Peruvian market, free market

Introducción

Entre las situaciones sociales más dramáticas provocadas por la pandemia de la COVID-19, se cuentan las escenas de personas que regresan desde los centros metropolitanos a sus regiones de origen. Eso no ha sucedido solamente en el Perú, sino también en países como México y la India. Se trata de un contingente de población que probablemente, en algunos países, pasará a engrosar la cifra de desplazados internos, una difícil realidad que, según las Naciones Unidas, afecta hoy en día a casi 40 millones de personas. Este fenómeno ilustra de un modo inesperado la fragilidad de los procesos de crecimiento económico y la paulatina integración social que han tenido lugar en diversas sociedades al compás de las reformas económicas liberales y la adopción del paradigma de mercado como forma predominante de organización social. Si bien el crecimiento económico de signo capitalista ha permitido la reducción de la pobreza, al producir, entre otros efectos, la multiplicación de puestos de trabajo, ello no ha redundado en la creación de clases medias sólidas. La crisis actual pone de manifiesto la fragilidad de ese aspecto de la transformación social y, por extensión, de los proyectos de desarrollo basados exclusiva o principalmente en la expansión del criterio de mercado a todos los órdenes de la vida social.

En este ensayo, pongo en consideración las raíces de esa precariedad —es decir, de cómo el crecimiento económico induce nuevas formas de marginación— centrándome en el caso del Perú, pero entendiendo que este no es un caso particular, sino un reflejo de lo sucedido en diversas sociedades. Un elemento central de esta reflexión es que no es un argumento sobre la inadecuación del mercado como un factor necesario del crecimiento y la integración social —es decir, de la superación de la exclusión—; antes que hablar de capitalismo y mercado en general, esta reflexión se concentra en la manera particular en que se reimpulsó ese modelo de organización social en diversos países y, entre ellos, en el Perú, desde la década de 1990. Se trata de un modelo que podría ser resumido en la noción de un capitalismo sin instituciones, el cual trae consigo inclusive una cierta forma de cultura política, o una ideología, como aquella que hoy se difunde bajo el nombre de *emprededurismo*, y que consiste en una valoración del éxito económico por medio de una

dedicación tesonera al trabajo, pero sin que ello esté vinculado a lazos comunitarios, cívicos o republicanos más amplios.

Esta reflexión se basa, por tanto, en el carácter revelador de la actual pandemia: ella pone en evidencia en el Perú y en muchas partes del mundo la endeblez del camino adoptado desde la década de 1990 –un giro hacia la extrema desvaloración del Estado y sus instituciones y hacia la valoración acrítica del mercado–, la cual se expresa ahora, de manera inesperada y dramática, en nuevas situaciones masivas de exclusión y marginalidad, al menos de manera potencial.

Pandemia y cambios sociales

Toda crisis produce al menos dos efectos: primero, el surgimiento de voces oraculares o proféticas que, por un lado, buscan explicar el sentido del suceso crítico y se animan a predecir sus consecuencias, normalmente en un tono fatídico, y, por otro, el cuestionamiento de las instituciones o las prácticas de una comunidad. Ambos efectos están fuertemente conectados, porque las crisis son sucesos perturbadores que para la persona común carecen de sentido; este reside en la normalidad, en aquello que es predecible y sobre lo cual el sujeto sabe cómo comportarse. La anormalidad, en cambio, es, para el sujeto común, el reino del sinsentido, en el cual las reglas de la vida cotidiana dejan de funcionar. Como consecuencia de ello, surgen los cuestionamientos a la normalidad para preguntarse en qué falló o si se puede constituir una nueva normalidad.

Sin embargo, las crisis no siempre producen revoluciones sociales o cambios significativos en el funcionamiento de las reglas sociales. Si por un lado la primera y la segunda guerras mundiales impulsaron revoluciones tecnológicas y fueron el origen de organismos internacionales, como la ONU o la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la crisis financiera de 2008-2009 no produjo, a pesar de su gravedad, transformaciones significativas. Las nuevas demandas, surgidas en aquella época, sobre responsabilidad social corporativa y buena gobernanza o el ajuste de algunas regulaciones no pueden llamarse propiamente revoluciones sociales o tecnológicas. En otras palabras, suele exagerarse las consecuencias de las crisis.

No sorprende entonces que filósofos populares en medios de comunicación hayan pronosticado audaces transformaciones que tendrían como eje el despertar social de las masas, pero es también observable la premura con la que los científicos están trabajando en encontrar una cura contra la enfermedad mediante vacunas o tratamientos. Este apuro no está completamente desligado del hecho de que la pandemia ha causado dos fenómenos sociales muy graves: la desaceleración del capitalismo y el crecimiento de la pobreza. Estas dos consecuencias están relacionadas, pero ocurre que las opiniones están divididas en dos bandos: quienes se preocupan más por recuperar la caída del PBI de los países y del mundo, y quienes se preocupan más por los pobres y los millones que han caído en el desempleo.

Que se dividan ambas preocupaciones debería resultar extraño, porque el desempleo y la pobreza se deben precisamente a la desaceleración de la producción capitalista. Se entiende aquí por producción capitalista aquella que se da por medio de agentes privados, con empleados asalariados según un contrato, y en un contexto de libertad de mercado y, por consiguiente, de competencia. Quienes están más preocupados por la recuperación de los negocios y especialmente el salvataje de las grandes compañías son precisamente quienes dan empleo. A su vez, quienes invocan al Estado, con justa razón, para que subsidie a los desempleados y los más pobres, deberían entender que tales medidas son, por naturaleza, transitorias, es decir, que no pueden sostenerse por un largo tiempo y solo se mantienen en tanto que hay una alta tasa de desempleo y vulnerabilidad.

Como ya se ha dicho, la alternativa entre salvar vidas y salvar a las industrias es un falso dilema. La mortandad de la pandemia no está todavía clara. Las estadísticas son contradictorias y parecen depender en gran medida de los lugares en donde ocurren los contagios y la capacidad de respuesta de los organismos de salud de cada nación. Por ser un virus nuevo, las autoridades de salud y los expertos no han podido todavía explicar bajo qué condiciones hay más o menos mortandad. Las medidas tomadas han sido distintas en los países y se han basado en lo que se sabe sobre los anteriores coronavirus. Mientras tanto, hay una carrera mundial para estudiar a fondo este nuevo virus.

Como consecuencia de ello, estamos ante un escenario de alta incertidumbre y por ello hay tantas opiniones divergentes respecto de sus consecuencias sociales. Las opiniones de los intelectuales públicos parecen principalmente apuestas, en el sentido en que lo son normalmente las profecías. Es comprensible, por lo demás, que una situación tan inesperada –y, al mismo tiempo, tan previsible, cuando se la mira retrospectivamente, haya estimulado la imaginación interpretativa de los productores de ideas. Esa actividad hermenéutica y prospectiva responde, además, a una amplia e intensa demanda social. Nuevos retos incitan a pedir nuevas respuestas. La alteración de la vida cotidiana requiere ser reinsertada en el flujo de lo comprensible.

Sin embargo, las limitaciones señaladas no significan de ninguna manera que esta pandemia no permita la reflexión sobre la condición social de nuestro tiempo e incluso la previsión de escenarios posibles como consecuencia de ella. Se podría sostener que, si esta crisis no va a inducir un cambio revolucionario, por lo menos sí va a acelerar tendencias que ya circulaban en la sociedad peruana y mundial.

El primer punto que deseo señalar es el de la institucionalidad, que ahora se suele llamar *gobernanza*. Antes de la pandemia, ya teníamos abundante evidencia de los problemas de gobernabilidad derivados de instituciones débiles, de corrupción y de conflictos entre estas instituciones. En este punto, la crítica principal es cuán central es el llamado gobierno central. La pandemia ha demostrado que hay un serio problema de descoordinación y de cruce de competencias, que no hay una institución que concentre la información y pueda dictar medidas de emergencia.

Esta distinción requiere de una precisión de índole sociológica. Las nociones de *centro* y *centralismo* tienen un significado en el ámbito administrativo e incluso económico que difiere de su sentido sociológico. Se refieren al hecho de que las decisiones de gobierno son tomadas desde el punto de vista de un centro dominante y que los recursos se concentran en ese centro o son distribuidos según su conveniencia y sus necesidades. Desde el punto de vista de la sociología, –o, al menos, desde cierta sociología funcionalista– la cuestión es si es que el centro administrativo, político e incluso económico de una

sociedad y desde el cual opera el Estado determina realmente, en la práctica, en la vida cotidiana y en las *funciones* de reproducción de una sociedad; es decir, si es que el centro oficial es verdaderamente un centro irradiador de funciones, como, por ejemplo, si determina los contenidos culturales, la forma real de las actividades económicas, la importancia y la efectividad de los contratos o la regimentación de la vida diaria. Planteada esa distinción, puede ser que en una sociedad haya, en efecto, un centro político y administrativo hipertrofiado, pero a la vez que ese centro sea sumamente débil en cuanto *centro funcional*.

Las regiones fueron creadas en el Perú con el fin de combatir el antiguo centralismo que define parte de nuestra historia republicana, pero desde antes de la pandemia, los gobiernos regionales ya exhibían deficiencias en su manejo. No solo por los casos de corrupción, sino sobre todo por su incapacidad de desarrollar proyectos. Los gobiernos regionales, en lugar de crear un sentido de comunidad y reivindicar los valores y tradiciones de la región como ejes para impulsar su desarrollo, se constituyeron en organismos sin capacidad de gestión e incluso en conflicto con el gobierno central. La pobre ejecución de sus presupuestos, así como la mala o inexistente calidad de muchas obras así lo demuestra. Si las regiones no tenían capital humano capaz de gestionar la normalidad, se comprende que les sea tan difícil enfrentar una situación de emergencia. Lo que aquí se señala es una limitación del centralismo en el plan administrativo y político. El correlato de eso es una limitación en el plano sociológico: ¿qué tan cierto es que el Estado peruano, con su base decisoria en Lima, es un efectivo gestor, igualador o rector de la vida cotidiana en las regiones? Ello es central cuando se quiere entender, por ejemplo, los agujeros de las medidas de contención durante la pandemia o la capacidad del Estado para saber realmente qué medidas paliativas tomar para hacer menos onerosas las medidas de cuarentena para la población.

De hecho, desde la declaración de la pandemia ocurrieron fricciones entre el gobierno central y los gobernadores regionales. Asimismo, varias instituciones de salud mostraron descoordinación. La entrega de alimentos a las poblaciones vulnerables fue encargada a las municipalidades y desde el primer momento hubo casos de corrupción y de aprovechamiento de la crisis para la figuración política.

El manejo de la cuarentena también incurrió en errores que fueron reconocidos por los mismos funcionarios. Esto es excusable por la alta incertidumbre de la circunstancia. Sin embargo, la falla principal es sistémica: los organismos de información y las estadísticas demostraron no estar preparados para ofrecer los números y los detalles necesarios para entregar los bonos de ayuda. De hecho, no hay una base de datos confiable y actualizada que permita saber quiénes pertenecen a la “población vulnerable” y dónde pueden ser ubicados. A esa descoordinación, hay que sumar las cifras dadas por instituciones independientes y que ofrecían resultados muy distintos de los oficiales. El presidente Vizcarra explicó que la cuarentena tenía como fin alcanzar una *meseta* de casos hasta el punto de que pudieran ser manejables por los centros de salud. Mientras tanto, se disponía de nuevas camas y se ordenaba la construcción de respiradores para las UCI. No dejó de haber cuestionamientos a la posibilidad de incrementar significativamente las UCI en tan poco tiempo e incluso se cuestionó su eficiencia, ya que se trata de aparatos sumamente sofisticados que, en su mejor versión, requieren de monitoreo computarizado. A todo esto, hay que sumar un hecho preocupante: no hay una cifra oficial de con cuántas camas cuenta el Estado. Ello ocurre por la falta de una centralización de la logística nacional. El manejo logístico centralizado es, sin duda, una de las herramientas más importantes para la gestión de una crisis. En conclusión, el Estado peruano demostró descoordinación al carecer de una cabeza al mando con información certera y actualizada.

A pesar de ello, es interesante anotar que desde la pandemia el presidente Vizcarra goza de un alto índice de aprobación. Se puede considerar que las apariciones diarias para explicar el avance de la crisis, así como el hecho de que los peruanos perciben que debe haber unidad ante un “enemigo”, como es el coronavirus, explican esta alta aprobación, a pesar de las marchas y contramarchas que no han quedado desapercibidas por los medios. Las fuertes y bien organizadas campañas de *trolls* (saboteadores) de filiación fujimorista no parecen haber tenido mayor efecto. La mayor parte de la ciudadanía percibe que el gobierno central está haciendo un gran esfuerzo para evitar mayores daños.

Dicho esto, paralelamente es notoria la desobediencia a las normas de la cuarentena y el distanciamiento social. Ello resulta paradójico: el público aprueba la gestión del gobierno central, pero a la vez se incumplen las normas, especialmente en las zonas populares, donde se producen aglomeraciones en los mercados. Aquí, se produce la tentación de acusar a los peruanos de falta de conciencia cívica, un hecho que no necesariamente se debe descartar. Ya desde los años 90, los sociólogos han estudiado la anomia en el Perú y ha hecho fortuna la expresión del antropólogo José Matos Mar sobre la crisis del Estado frente al “desborde popular”. La contraparte liberal de esta misma idea se halla en *El otro sendero* de Hernando de Soto. Ambas investigaciones coincidieron en que hay un desfase entre el Estado y las clases populares. Las reformas de Alberto Fujimori ocurridas en los 90 cambiaron en buena parte ambos diagnósticos, ya que durante dicho gobierno se hizo mucho énfasis en la presencia estatal en los sectores marginados y se simplificaron los requisitos para obtener propiedades y crear negocios, tal como proponía el libro de Hernando de Soto.

Transformación económica y nueva marginalidad

Las reformas introducidas durante el gobierno de Alberto Fujimori reorientaron la marcha de la economía peruana, primero generando una estabilización financiera, y, después, propiciando una economía de mercado casi sin reglas. En ese contexto, y en un plano derivado, que podría denominarse cultural o simbólico, esas mismas reformas implicaron una reivindicación del *capitalista popular*. Tuvieron como resultado positivo la aparición de los llamados *grupos emergentes*, es decir, familias de origen popular que prosperaron hasta niveles económicos bastante altos.

El régimen fujimorista fue corrupto en un grado extremo. Aprovechó las reformas del Estado para corromper las instituciones, pero más importante para entender la crisis que ha provocado la pandemia es el hecho de que el fujimorismo gobernó con un estilo que podemos llamar de reformas permanentes. La reorganización de las instituciones fue una excusa para mantenerlas sometidas y como

consecuencia de ello nunca terminaron de fortalecerse. Sobre todo, la formalización de la economía nunca terminó de cumplirse.

De manera que, más que de la falta de civismo de la población, la principal causa de la desobediencia y del desorden es la enorme informalidad de la economía peruana, que llega al 70 %. Resulta imposible imponer normas laborales a empresas no constituidas y a negocios que son en realidad formas de autoempleo.

Esta marginalidad es, pues, un asunto estructural que fue abordado tímidamente por los gobiernos posteriores al de Fujimori. El Estado peruano no cuenta con los instrumentos para conocer las necesidades de la población y ante la urgencia de mantener los ingresos, el *desborde popular* vuelve a aparecer como respuesta ante un Estado que no le ofrece alternativas.

Se puede afirmar, entonces, que esta crisis está acentuando deficiencias ya existentes y revelando una suerte de marginalidad latente. Estas existían potencialmente, pero estaban en una situación de sobrevivencia que, hay que decirlo, era aprovechada por los grupos políticos de derecha que tomaban provecho de dicha vulnerabilidad para obtener votos a cambio de pequeñas prebendas. Algo relevante, aquí, es la manera en que se desmantela la idea de que en dos décadas de mercado sin reglas el Perú había pasado a ser prácticamente un país de clase media. Bastó una sanitaria crisis mundial para poner de manifiesto la endeblez de esa imagen.

Por tanto, se puede considerar que, así como la crisis acentúa las desigualdades sociales y las deficiencias del Estado, también se puede afirmar que impulsará tendencias que ya estaban planteadas, pero no terminaban de cumplirse.

Tomemos como ejemplo el déficit de provisión de agua y alcantarillado. En su discurso inaugural como nuevo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski se centró en la meta de “agua para todos”. Era una propuesta concreta cuyo cumplimiento tendría un alto impacto en el desarrollo humano del Perú. O bien por los conflictos políticos y los actos de corrupción que llevaron a Kuczynski a su caída o bien por la ausencia de una seria gestión que permitiera cumplir dicha

meta, esa gran promesa quedó incumplida, pero de haberse logrado, al menos en parte, el Perú contaría con una mejor situación sanitaria. Por tanto, la crisis del coronavirus podría impulsar su cumplimiento. Contar con agua corriente mejora la calidad de vida de manera significativa y posibilita medidas de prevención.

Otra tendencia que cabe señalar es la cobertura digital nacional. El déficit en este aspecto pone al margen de la información a millones de peruanos. Una buena cobertura de acceso a internet permitiría la recopilación veloz de información a fin de mantener estadísticas e información actualizadas. Igualmente, contribuiría enormemente a la educación, a la información que requieren los ciudadanos y al fomento de un mercado ágil.

Finalmente, la reforma educativa puede acelerarse, ante la evidencia de que se necesita ciudadanos mejor informados y más conscientes de su papel en la sociedad. Ello significa, en conclusión, que, si cabe esperar alguna derivación virtuosa de esta dramática crisis, ella debería ser cierta recuperación del concepto de bien público, que ha sido devastado por la ideología de mercado, según la cual lo privado siempre es mejor. No siempre lo es, como se observa en esta crisis. Las comunicaciones digitales, el transporte, la salud y la educación requieren, por lo menos, de una alta regulación del Estado. Además, hay que reconocer el fracaso de la regionalización y repensar cómo debería ser estructurada. La pandemia no nos trae consigo nada nuevo. Más bien, resalta nuestras deficiencias y puede convertirse en una oportunidad para impulsar las nuevas tendencias de gobernabilidad.